

CC.OO. reclama a la Generalitat

Un crecimiento del 10% en los presupuestos educativos

El inicio del curso escolar en Catalunya se ha caracterizado por el aumento de las inversiones en construcciones escolares y en plantillas docentes, pero también por la persistencia de viejos problemas derivados de la escasez presupuestaria y la deficiente planificación que lleva a cabo el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya. En un contexto de recuperación económica, tan cacareada oficialmente, CC.OO. ha reclamado a la Generalitat un crecimiento de los presupuestos educativos para el período 1998-2001 del 10% anual, con el objetivo de recuperar los años perdidos con los sucesivos ajustes presupuestarios y cumplir al menos con los objetivos iniciales de la Memoria Económica de la LOGSE, elaborada en 1990.

La enseñanza pública requiere más recursos

En el sector público, los problemas este año se han centrado en el retraso en la ejecución del programa de construcciones de colegios e institutos, que ha ocasionado sobre todo una masificación excesiva en los centros de secundaria, donde la falta de espacios para escolarizar adecuadamente al alumnado de la ESO es la queja más frecuente. A ello debe añadirse la escasez de las asignaciones que reciben los centros para gastos de funcionamiento, las dificultades que todavía presenta en secundaria la prestación efectiva de los servicios de transporte y comedor escolares y, un año más, la insuficiente oferta pública de educación infantil 0-3 años, que en este inicio de curso, como consecuencia de los desplazamientos internos de población y las migraciones, se ha notado incluso en las aulas de 3 años de los colegios de las ciudades y zonas que registran un crecimiento demográfico notable. Todos estos problemas ponen de relieve la necesidad de invertir más recursos en la red pública para satisfacer las demandas sociales y mejorar la calidad educativa.

Desde el punto de vista del profesorado, debe destacarse que el crecimiento de plantillas, con ser importante y positivo –producto de los acuerdos de 1995–, todavía no ha sido aprovechado por el Departamento de Enseñanza para solucionar la situación laboral del profesorado interino –a inicios de curso unos 8.000–, y del profesorado con plazas en propiedad provisional o pendiente de adjudicación de destino definitivo –unas 4.000 personas entre primaria y secundaria–, con lo que la sensación de inestabilidad en estos colectivos se acrecienta sin que la Administración sea capaz de recoger las propuestas sindicales para regularizar estas situaciones. Desde CC.OO. exigiremos este año una actuación decidida para desarrollar los acuerdos de Enseñanza y Función Pública en orden a concretar medidas –como la salida de todas las plazas a concurso, la potenciación de la formación para la adquisición de nuevas especialidades o la fijación de un cupo de plantilla adscrita a zonas concretas para las substituciones–, que permitan estabilizar lo máximo posible las plantillas docentes.

El profesorado de privada quiere soluciones

En la red privada, la extensión de los conciertos educativos con la implantación de la LOGSE no ha servido para corregir algunos de los principales problemas del sector, como

las elevadas ratios alumnado/aula o el cobro de importantes cuotas de escolarización. Tampoco ha mejorado el control de la Administración educativa sobre los titulares de los centros privados para que se respeten los derechos de escolarización en pie de igualdad y evitar las discriminaciones.

Uno de los efectos positivos de la extensión de los conciertos ha sido el relativo buen funcionamiento de los acuerdos sobre centros en crisis y recolocación del profesorado, que, aunque con retrasos y una cierta opacidad patronal en la oferta de plazas, ha permitido la continuidad laboral de buena parte del profesorado afectado, si bien en el inicio del curso todavía quedaban algunos docentes por recolocar. No obstante, debe destacarse que en el sector privado continúa existiendo un importante grado de ocupación precaria, proliferando además contratos de tipo mercantil que obligan a los trabajadores a pagar de su bolsillo las cuotas sociales. Por otro lado, el escaso compromiso de la Administración y las patronales está impidiendo avanzar en la clarificación de las titulaciones para impartir las nuevas especialidades de la LOGSE, sin que se aprecie una voluntad clara de impulsar una adecuada política de formación del profesorado. Además, debe recordarse que todavía está pendiente –tanto en el aspecto retributivo como en horarios laborales– buena parte del proceso de homologación del profesorado de la privada con el de la red pública. Todos estos son aspectos que CC.OO. se propone abordar en la negociación del próximo convenio de privada concertada de Catalunya, así como el resto de convenios sectoriales.

Los problemas apuntados requieren un esfuerzo presupuestario y negociador adecuado por parte del Departamento de Enseñanza y de las patronales del sector privado. Con demasiada frecuencia, estamos asistiendo en este inicio de curso a presentaciones efectistas que subrayan los efectos de la caída demográfica en las aulas, con la intención poco disimulada de justificar la contención de la inversión en educación. Este tipo de argumentos no son de recibo, primero porque la escolarización obligatoria ha aumentado y con ella las demandas sociales, segundo porque los déficits históricos de nuestro sistema educativo deben ser corregidos en coyunturas favorables como la actual. Por todas estas razones, la exigencia de un plan de financiación –con el consiguiente aumento de los presupuestos anuales de la Generalitat–, será uno de los ejes de trabajo prioritarios de CC.OO. para este curso.